

Santiago, cuatro de octubre de dos mil veintiuno.

Se complementa acta de audiencia de dieciséis de septiembre del año dos mil veintiuno, incorporándose con esta fecha el texto íntegro de la sentencia dictada.

RIT O-1495-2021

RUC 21- 4-0324778-K

M.E.A.P.

TRANSCRIPCIÓN SENTENCIA:

Santiago, dieciséis de septiembre del año dos mil veintiuno.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que compareció don **MIGUEL ANGEL MATUS MITRIHUAL**, RUT: 8.584.628-0 y don **PATRICIO ALBERTO AYARTE AINSA**, RUT: 16.135.538-0, ambos con domicilio en Morandé 835, oficina. 1410, de la comuna de Santiago, quienes interpusieron demanda por despido injustificado y cobros de prestaciones en contra de su ex empleadora **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.**, domiciliada en Av. Apoquindo 4820, de la comuna de Las Condes, RUT: 98.000.000-1. Al efecto indicaron que iniciaron prestación de servicios en calidad de agente profesional de ventas, el caso del señor Matus Mitrihual, el 7 de marzo del año 2016 y hasta el 17 de febrero del 2021 con una remuneración de \$1.283.307. En el caso de don Patricio Alberto Ayarte Ainsa, el inicio de la prestación de servicios data desde el 21 de agosto del 2018 y su despido se produjo el 26 de febrero del 2021, percibiendo como última remuneración la suma de \$1.465.479.-



Respecto al término de la relación laboral, ambos señalan haber sido despedidos mediante cartas de despido de idéntico tenor, en las fechas ya señaladas por la causal del artículo 161, inciso primero del Código del Trabajo, señalando brevemente el contenido de dicha misiva y denunciando que esta se limita a hacer un mero parafraseo del Código del Trabajo para justificar su exoneración, con expresiones totalmente genéricas y señalando someramente que se trataría de una restructuración respecto de la cual nada se dice respecto de su significado y alcance. También se hace referencia a la crisis sanitaria que ha implicado una menor recaudación de comisiones pagadas por los cotizantes y respecto de ello, señalan que es carga probatoria de la parte demandada, pero que además esta debe revestir una magnitud tal que haga imprescindible la exoneración de los trabajadores demandantes. Finalmente respecto de este punto, señalan que en la práctica es imposible que se haya suprimido el puesto de trabajo, en el sentido del cargo de agente profesional de ventas, por cuanto, implicaría una nula posibilidad de atención a clientes y venta de servicios, luego indicaron que suscribieron finiquitos, ambos con reserva de derechos respecto de las prestaciones que solicitan en esta demanda y respecto a las citas legales, se refirió específicamente a las del despido injustificado y a la ley 19.728 respecto al seguro de cesantía, el cual, le fue descontado en su finiquito y que debe ser devuelto, pues la causal de despido no ha sido justificada.

Es por esto que solicitan se acoja la demanda y que se condene a la demandada al recargo legal del 30% sobre la indemnización por año de servicios que se pagó en el finiquito, respecto del señor Matus Mitrihual \$1.924.961, y en el caso de don Patricio Alberto Ayarte Ainsa por 1.318.931, y en cuanto a la devolución del aporte a la AFC del empleador en el caso del señor Matus Mitrihual \$1.303.777 y en caso de don Patricio Alberto Ayarte Ainsa por \$ 956.351, todo ello con intereses, reajustes y costas.

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago – Merced 360
Fono 226755600/ Mail: jlabsantiago2@pjud.cl



SEGUNDO: Que contestando la demanda, se reconoció como no controvertido, las funciones desempeñadas por los actores, correspondientes a agente profesional de ventas, también la extensión de la relación laboral ya indicada respecto de cada trabajador y la remuneración reconocida en la demanda.

Respecto al despido señaló que este se justifica en una restructuración que se lleva a cabo en la empresa, en el marco del constante proceso de recambios de objetivos de la compañía y la necesidad de robustecer la estructura de la empresa, como consecuencia de la epidemia del COVID, hay una caída en sus resultados derivada de la caída de la rentabilidad que ha afectado a los mercados, no solo a nivel nacional y que alcanza al patrimonio de su representada a través del resultado del encaje del 1%, pero que representa más de la mitad del patrimonio de la administradora, es por eso que en el primer trimestre del 2020 hubo pérdidas cercanas a los \$ 32.000.000.000 y eso implicó que se haya ido efectuando esta restructuración, prescindiendo de algunos cargos tanto en el 2020 como en el año 2021, señalando a título ejemplar algunas de las desvinculaciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020 y de los meses de enero y febrero del 2021, agregando que la eliminación de puestos de trabajo se justifica plenamente en la necesidad de la empresa del término de contrato de trabajo y por tanto, se encuentra justificada la causal.

En cuanto al descuento del empleador al seguro de cesantía, este sería justificado y procedente, señalando las normas legales que así lo disponen y alguna jurisprudencia relativa a ello.

TERCERO: Que la audiencia preparatoria se desarrolló el 22 de julio del 2021, oportunidad en la que se efectuó el llamado a conciliación sin que esta se alcanzara. Se fijaron a continuación como hechos no controvertidos:

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago – Merced 360
Fono 226755600/ Mail: jlabsantiago2@pjud.cl



1. El periodo de la relación laboral;
2. Las funciones desempeñadas;
3. La remuneración de cada uno de los actores;
4. el despido por el 161 inciso 1° del Código del Trabajo, a través de una carta que cumplió con las formalidades legales;
5. Monto descontado por concepto de aporte al seguro de cesantía.

Como hechos a probar se fijaron:

1. El contenido de la carta de despido y la efectividad de los hechos allí invocados;
2. La procedencia del descuento del seguro por AFC.

CUARTO: Que la audiencia de juicio tuvo lugar con esta fecha, y en ella se rindió la prueba que consta en el acta de la audiencia respectiva. La demandada incorporó prueba:

Documental:

- 1) Carta de despido de Miguel Matus, de fecha 17 de febrero de 2021.
- 2) Constancia de despido enviada a la Inspección del Trabajo de Miguel Matus.
- 3) Finiquito de Contrato de Trabajo de Miguel Matus.
- 4) Certificado de saldo Aporte Empleador para imputar a la indemnización de Miguel Matus.



- 5) Carta de despido de Patricio Ayarte, de fecha 26 de febrero de 2021.
- 6) Constancia despido Inspección del Trabajo de Patricio Ayarte.
- 7) Finiquito de contrato de trabajo de Patricio Ayarte.
- 8) Certificado de saldo aporte empleador para imputar a la indemnización de Patricio Ayarte.
- 9) Carta de fecha 15 de abril de 2020, dirigida al presidente de la CMF por el gerente general de la demandada.
- 10) Print de Pantalla de las correspondencias enviadas a la CMF con fecha 15 de abril de 2020.

11) 56 cartas de despido de los siguientes ex trabajadores:

Fecha De Despido- Rut -Nombre

02-10-20 10684177-2 López Sepúlveda, Solange

02-10-20 13448681-3 Robles Ibacache, Paola Elizabeth

02-10-20 11298333-3 Rauque Nuñez, Marcela Del Carmen

02-10-20 10773919-K Contreras López, Ricardo Patricio

02-10-20 09004478-8 Aranda Duran, Elizabeth

02-10-20 13930687-2 Diaz Godoy, Leticia Veronica

02-10-20 06072956-5 Constenla Cardenas, Nelson Luis

02-10-20 09382064-9 Irrazabal Sobarzo, Juan Pablo

02-10-20 16173651-1 Gamboa Becerra, Daniel Enrique

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago – Merced 360

Fono 226755600/ Mail: jlabsantiago2@pjud.cl



02-10-20 08796500-7 Lastra Villagra, Ricardo Andres

02-10-20 07346880-9 Piccolis Díaz, Rossana Victoria

02-10-20 15472994-1 Rodríguez Tasso, Fabiola Alesandra

02-10-20 10734922-7 Villalón Salinas, Valeria Elly

02-10-20 10201671-8 Ulloa Pino, Susana Ivonne

02-10-20 11833328-4 Fernández Vilchez, Ada Lorena

02-10-20 12991150-6 Valencia Caro, Solange Soledad

02-10-20 16415708-3 Panes Marín, Sylvana

02-10-20 08314023-2 Reyes Pinto, María Verónica

02-10-20 08189127-3 Contreras Navarrete, María Soledad

02-10-20 10068814-K Olguín Ehrmantraut, Juan Manuel

02-10-20 14478854-0 Muñoz Chocce, Melba Teodora

02-10-20 11131002-5 Fernandez Diaz, Myriam Ledy

02-10-20 15678884-8 Encina Morales, Marco Andre

02-10-20 11858579-8 Donoso Mella, Gisela

02-10-20 15377261-4 Báez Alarcón, Vanessa

02-10-20 10957396-5 Mena Gallardo, Ítalo Gonzalo

02-10-20 16725220-6 Muñoz Ortega, Cristina

02-10-20 15663145-0 Soto Fuenzalida, María José

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago – Merced 360
Fono 226755600/ Mail: jlabsantiago2@pjud.cl



02-10-20 13598008-0 Navarro Henriquez, Lucia Karina
02-10-20 13102228-K Figueroa Valenzuela, Carla Zulema
07-10-20 07701102-1 Pinto Echeverria, Mireya Ana
13-10-20 06221877-0 García Fuentes, Rogelio Eduardo
13-10-20 13459342-3 Sekulovic Muñoz, Alejandro Goroslav
27-11-20 12843586-7 Callejas Godoy, Gerardo Andres
27-11-20 08394062-K Mendoza Henríquez, Ximena Alondra
27-11-20 15016336-6 Soto Robles, Karen Alejandra
27-11-20 10189720-6 Araya Molina, Marjorie Soledad
30-11-20 10738738-2 Gallegos Ríos, Edmundo Artidoro
30-11-20 16407417-K Soriano Muñoz, Dayana Magdalena
30-11-20 12239061-6 Canas Canas, María Alejandra
18-12-20 09085048-2 Rodríguez Pérez, Sandra Carlina
18-12-20 10772019-7 Ríos Salazar, Javier Antonio
18-12-20 09583228-8 Wong Ortiz, Patricio Joaquín
18-12-20 13352035-K Flores Yáñez, Gisela Andrea
21-12-20 07906215-4 Alvarez Duran, Alejandro Mauricio
29-12-20 13548456-3 Sole Gaete, María Ximena
29-12-20 07006870-2 Djimino Sotomayor, Pamela
Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago – Merced 360
Fono 226755600/ Mail: jlabsantiago2@pjud.cl



29-12-20 13916355-9 Segovia Favio, María Isabel

29-12-20 16278912-0 Campos Vásquez, Paulina Isabel

Absolvieron posesiones los demandantes, **Miguel Ángel Matus Mitrihual** y don **Patricio Alberto Ayarte Ainsa**, los cuales, constan en el debidamente en el correspondiente de audio

Incorporó el testimonio de los siguientes testigos **Carla Bravo Aguilera** e **Iván Andrés Zúñiga Arredondo**, quienes debidamente juramentados exponen sobre los hechos que constan en el registro de audio.

Se incorporaron las respuestas de los oficios de las siguientes instituciones:

1) Dirección del Trabajo

La parte demandante incorporó los siguientes medios de prueba:

Documental:

1) Miguel Angel Matus Mitrihual

1. Carta de aviso de término de contrato de trabajo de fecha 17 de febrero de 2021.
2. Finiquito de contrato de trabajo de fecha 17 de febrero de 2021, suscrito con expresa reserva de derechos con fecha 02 de marzo de 2021.

2) Patricio Alberto Ayarte Ainsa

1. Carta de aviso de término de contrato de trabajo de fecha 26 de febrero de 2021.
2. Finiquito de contrato de trabajo de fecha 26 de febrero de 2021, suscrito con expresa reserva de derechos con fecha 09 de marzo de 2021.

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago – Merced 360
Fono 226755600/ Mail: jlabsantiago2@pjud.cl



Se desisten de la prueba confesional y testimonial.

QUINTO: Que en el presente caso los trabajadores despedidos han hecho uso del derecho previsto en el artículo 168 del Código del Trabajo, de manera que el primer objeto de la litis ha sido establecer la procedencia o no el término de los servicios, calificación que determinará si corresponde ordenar el recargo del 30% solicitado respecto de la indemnización por años de servicio pagada en el finiquito.

Que atendida la naturaleza protectora de la legislación laboral y, en esa línea, la preferencia normativa por la estabilidad en el empleo, siendo el término de servicios por despido una situación excepcional a dicha preferencia, se exige que la decisión del empleador sea fundada y causada, poniéndose además de cargo este la obligación y carga de demostrar el envío de la comunicación de término y luego lo expresado en ella.

Así lo refleja el numeral primero en su inciso segundo del artículo 454 del Código del Trabajo, al señalar que en los juicios sobre despido corresponderá –en primer lugar– al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido.

SEXTO: Que en el presente el caso, la comunicación de despido es idéntica para ambos demandantes y puso término al contrato de trabajo por la causal del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, fundándola exclusivamente en “la supresión y reestructuración de funciones en lo referente a algunos cargos” que “se presentan a raíz del impacto en el empleo producto de la epidemia de COVID-19, que ha impactado a las



economías a nivel mundial y a los mercados, repercutiendo negativamente en la recaudación”.

Ciertamente una misiva en tales términos no cumple con la exigencia del inciso primero del artículo 162 del referido texto legal, pues no contiene los hechos que sustentan la decisión del empleador de terminar el acto jurídico que lo vinculaba con los demandantes, toda vez que no se dice en qué consiste la reestructuración ni sus alcances, ni por qué no pudo mantener el puesto que aquellos ocupaban, existiendo evidencia testimonial de la propia demandada respecto a que el cargo que servían los actores (agente profesional de ventas) lo siguen desempeñando una gran cantidad de trabajadores. De modo tal que al no haberse señalado los hechos que fundan la causal esgrimida para la desvinculación, el demandado se puso justamente en la hipótesis que contempla el inciso segundo N° 1 del artículo 454 del Código del Trabajo, que en calidad de prohibición impide argumentar hechos que no alegó en la única oportunidad que se encontraba habilitado por ley, la carta de despido. Esta interpretación, además, resulta coherente con el derecho a defensa que le asiste al trabajador para, a través de su demanda, controvertir los hechos explicitados en la carta de despido que justifican el término del contrato.

De lo razonado no cabe, sino concluir que formalmente la comunicación de despido no cumple con señalar los hechos específicos en que se funda, desde que la vaguedad de su propia formulación no permite subsumirla en la hipótesis legal por lo que tampoco se pudo demostrar que el despido de los demandantes es necesario, lo que únicamente se lograría si se expresara en la misiva respectiva cómo se deriva tal necesidad de los hechos descritos en la misma, lo que precisamente no ocurre en la especie. Así, el despido deberá declararse como injustificado.



SÉPTIMO: A mayor abundamiento, es claro que el fundamento del despido del actor es la sobredotación de personal, y así lo reitera en su contestación, respecto de lo cual sólo huelga decir que la propia demandada es quien decidió contar con una determinada cantidad de trabajadores y luego disminuirla, por lo que es únicamente imputable a ella tal decisión, lo que no viene sino a ratificar la conclusión de declarar injustificado el despido.

Pensar de otra manera, implicaría despojar la “necesidad” que contempla la causal de despido de todo carácter objetivo, pues bastaría que –como en la especie– se consigne en la carta respectiva que a la empresa se le hace difícil mantener los puestos de trabajo debido a sus ajustes empresariales (en este caso la carta consigna el “constante proceso de recambios de objetivos de la Compañía” pues los resultados de la misma “no han sido los esperados”) para que se justifique entonces el despido, no como algo ineludible, sino por la mera decisión de la empresa de conseguir sus fines productivos mediante la disminución del costo en remuneraciones, argumentación que de por sí lleva a concluir la injustificación del despido, puesto que el trabajador disfruta de la protección que le brinda un contrato bilateral e indefinido. Por lo demás, ello implicaría traspasar una parte de los riesgos de la actividad económica a los trabajadores, cuestión que tampoco forma parte del contrato de trabajo ni está permitido con tal amplitud en nuestra ley laboral.

Por lo demás, no se señala en la carta de despido, el nivel de disminución de puestos de trabajo, de manera que no es posible calificar –al menos por sus consecuencias– la gravedad de la situación invocada por la empresa en la misiva de desvinculación, quien sólo acreditó cerca de 60 despidos por necesidades de la empresa entre los meses de enero y febrero de 2021, todo ello mediante el oficio de la Dirección del Trabajo. En efecto, recién al contestar la demanda y rendir la



prueba, la parte demandada ha incorporado una serie de circunstancias que – pudiendo servir de fundamento a la decisión de despedir al actor– son ajenas a la comunicación de despido, de las cuales el demandante –por tanto– nada ha podido señalar en su demanda.

Finalmente, no se rindió prueba idónea relativa a la disminución de la recaudación esgrimida en la carta de despido, pues la carta dirigida al Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero emana de la propia parte y sus testigos dieron cuenta con extrema generalidad de dichas disminuciones, por lo que ninguna convicción generaron en el tribunal sobre este punto.

En las condiciones anotadas en los considerandos precedentes, sólo cabe concluir que el despido de los actores fue injustificado, debiendo darse lugar al recargo de la indemnización pagada por años de servicio en un 30% respecto de los montos que constan en sus respectivos finiquitos.

OCTAVO: Que en lo relativo al descuento del aporte efectuado por el empleador al fondo de cesantía, también con mérito en los finiquitos mencionados sin perjuicio de ser pacífico entre las partes, se tiene por efectivo que al demandante Matus se le descontó la suma de \$1.303.777, en tanto al actor Ayarte la cantidad de \$956.351.

Sin embargo, no resulta procedente efectuar el descuento de dicho monto respecto de la indemnización por años de servicios, ya que, el despido de que fue objeto el demandante ha sido calificado como injustificado. Al efecto, cabe tener presente que atendido el mérito de la jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema, a modo de ejemplo en sentencia de unificación Rol N° 2778-2015, ha quedado de manifiesto que los argumentos aportados por la parte demandante para solicitar la improcedencia del referido descuento tienen asidero legal, por cuanto si bien el



artículo 13 de la Ley N° 19.728, señala que: “*Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios... Se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad...*”; efectivamente se contempla la posibilidad de efectuar el descuento del aporte del empleador antes aludido, es innegable también que el legislador se puso en la situación en que un empleador pusiera termino al contrato de trabajo que lo vinculaba con un trabajador haciendo uso de manera justificada de las causales del artículo 161, ya señalado. Dicho criterio ha sido reiterado en sentencia de unificación de jurisprudencia de 26 de agosto de 2021, dictada en rol Excm. Corte Suprema 19543-2020.

En ningún caso entonces, puede pretenderse que sea aceptado por la judicatura laboral que un empleador que a sabiendas procede al despido de un trabajador en virtud de la causal de necesidades de la empresa, sin justificación alguna, como se declaró en el caso de autos, pueda además beneficiarse con una franquicia que le otorgó el legislador en un texto especial. Y así fue resuelto en el primer fallo de unificación de jurisprudencia citado, advirtiendo que se estaría “validando un aprovechamiento del propio dolo o torpeza”, por lo que se procederá a acoger la solicitud de la parte actora en cuanto a ordenar la improcedencia del descuento del aporte al AFC respecto de las indemnizaciones pagadas por años de servicios a los actores.

NOVENO: Que la prueba ha sido analizada conforme las reglas de la sana crítica y el restante material probatorio en nada altera lo resuelto precedentemente.



DÉCIMO: Que se condenará a la demandada al pago de las costas de la causa por resultar completamente vencida y estimar que no litigó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 a 11, 161, 168, 172, 425 a 459 y siguientes, todos del Código del Trabajo, y artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728; **se resuelve:**

I.- Que se acoge íntegramente la demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones interpuesta por **MIGUEL ÁNGEL MATUS MITRIHUAL y PATRICIO ALBERTO AYARTE AINSA** en contra de su ex empleadora **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.**, todos ya individualizados, y –en consecuencia– se declara:

- a) Que la decisión de despedir a los actores resulta injustificada.
- b) Que, en consecuencia, la demandada deberá pagarles las siguientes sumas de dinero:

MIGUEL ÁNGEL MATUS MITRIHUAL

- 1) \$ 1.924.961 por concepto de recargo legal.
- 2) \$ 1.303.777 por concepto de descuento indebido del aporte a la AFC realizada por el empleador.

PATRICIO ALBERTO AYARTE AINSA

- 1) \$ 1.318.931 por concepto de recargo legal.
- 2) \$ 956.351 por concepto de descuento indebido del aporte a la AFC realizada por el empleador.

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago – Merced 360
Fono 226755600/ Mail: jlabsantiago2@pjud.cl



II.- Que las sumas antes referidas serán reajustadas y devengarán intereses de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

III.- Que se condena a la sociedad demandada al pago de las costas de la causa, fijándose desde ya las personales en la suma de \$500.000.-

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, y –en caso contrario– se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo.

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT: O-1495-2021.

RUC: N° 21-4-0324778-K.

Sentencia dictada por Víctor Manuel Covarrubias Suárez, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

